



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

EJECUTANTE	PROTECCIÓN S.A.
EJECUTADA	CONTACTAR SERVIRTUALES S.A.S..
TIPO DE PROCESO	EJECUTIVO
RADICADO NACIONAL	05266-31-05-001-2018-00137-01
ASUNTO	RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE RECHAZÓ DEMANDA EJECUTIVA
DECISIÓN	REVOCA

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y la Ponente **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2° del art. 15 del Decreto 806 de 2020, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **PROTECCIÓN S.A.** contra **CONTACTAR SERVIRTUALES S.A.S.**, se resuelve recurso de apelación frente a la decisión adoptada por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, mediante la cual rechazó la demanda ejecutiva por no haber subsanado la parte actora los requisitos exigidos<sup>1</sup>.

**I. ANTECEDENTES**

La administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. interpuso demanda ejecutiva contra la sociedad CONTACTAR SERVIRTUALES S.A.S. por las sumas de \$24'149.671 por concepto de aportes pensionales a cargo del empleador y de \$7'139.900 por intereses moratorios causados y no pagados hasta el 2 de marzo de 2018<sup>2</sup>.

El Juzgado Laboral del Circuito de Envigado mediante auto del 16 de abril de 2018, requirió lo siguiente como adecuación de la demanda, so pena de rechazo:<sup>3</sup>

- 1. Aportar la prueba de la vinculación y/o afiliación de los trabajadores relacionados en el título ejecutivo, por parte del empleador ejecutado.
- 2. Individualizar cada una de las personas objeto de la demanda.

<sup>1</sup>Nota: La foliatura a la que se hace referencia en esta providencia corresponde a la asignada digitalmente por este Despacho al archivo “01-2018-00137 Expediente Ejecutivo”, visible en la parte superior derecha de cada página, en color rojo.  
<sup>2</sup> Fls.1/6.  
<sup>3</sup> Fl. 26

3. Aclarar, lo adeudado por capital, por cuanto la pretensión habla de valor diferente al indicado en el título.

Para dar cumplimiento a lo exigido, el apoderado de la parte ejecutante presentó escrito indicando que<sup>4</sup>: **1)** no allega las pruebas de vinculación de los trabajadores, al no haberse vinculado al fondo a través de su relación laboral con el empleador; **2)** individualizó cada una de las personas cuyos aportes son objeto de demanda ejecutiva; y **3)** aclaró que el error presentando entre el título ejecutivo y lo indicado como valor adeudado, fue un error formal, más no de fondo, pues los puntos que separan las cifras están mal colocados, pero el estado de deuda es el mismo; y anexó copia del título corregido(fl. 30).

### **Del auto recurrido**

Mediante auto del 30 de abril de 2018<sup>5</sup> el Juez A Quo, rechazó la demanda ejecutiva por considerar que la parte no satisfizo el requisito exigido, al haber aportado como título ejecutivo un documento en copia, y no el original.

### **Recurso de apelación**

**Inconforme** con la decisión, la parte ejecutante formuló recurso de reposición y en subsidio apelación<sup>6</sup>, argumentando que: **i)** en la providencia por la cual se inadmitió la demanda el juez no exigió la presentación de un nuevo título ejecutivo, pues la literalidad de lo requerido remite únicamente a la aclaración de lo adeudado por capital, lo cual se satisfizo; y **ii)** el rechazo de la demanda ejecutiva carece de fundamentación, pues el apoderado desconocía que debía aportar un nuevo título ejecutivo para cumplir lo exigido; además, con posterioridad tampoco se le exigió.

Para desatar el recurso<sup>7</sup>, el juzgado de primera instancia indicó que el título ejecutivo debe contener una obligación clara, expresa y exigible, además debe reunir *requisitos formales*, los cuales garantizan la autenticidad de los documento y que emanen del deudor o de su causante, o de una providencia proferida por un funcionario judicial que tenga fuerza ejecutiva, entre otros: y *requisitos de fondo*, referentes a que el documento esté a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, razón por la cual, al haber aportado el ejecutante un documento en copia y no el original, no existe convicción de su autenticidad como título ejecutivo, manteniendo su decisión, y como consecuencia concedió el recurso de apelación, remitiendo el expediente al H. Tribunal Superior de Medellín para su conocimiento.

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia**

Una vez corrido el traslado para alegar en esta instancia, ninguna de las partes hizo uso del término otorgado con ese fin.

Esta Sala para resolver, se permite formular las siguientes,

---

<sup>4</sup> Fls. 27/29

<sup>5</sup> Fls. 31/32

<sup>6</sup> FLs. 33/35

<sup>7</sup> Fls. 36/42

## II. CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Art. 57 de la Ley 2ª de 1984 y los Arts. 15 -literal b-, 65 N° 8 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: “8. *El que decida sobre el mandamiento de pago*”.

Según el alcance del sustento del recurso de apelación, la Sala observa como problema jurídico a resolver: **i)** si resulta ajustada a derecho la decisión adoptada por el juez de instancia de rechazar la demanda ejecutiva por la causal esgrimida por el A quo, quien adujo incumplimiento de la parte ejecutante en las exigencias señaladas para su admisión.

### **i) Del título ejecutivo y sus requisitos.**

El **artículo 100 del CPTSS**, consagra que puede ser exigible ejecutivamente “*el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme (...)*”.

Ha definido la doctrina<sup>8</sup> el título ejecutivo, como todo documento, incluyendo las providencias judiciales y arbitrales, provenientes del deudor o de su causante, donde consta una obligación clara, expresa y exigible en favor de su acreedor o del tenedor legítimo. Siendo posible entonces, demandar “*ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles **que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él...***”, por así disponerlo el artículo 422 del CGP, aplicable por remisión analógica al procedimiento laboral.

Ahora, sobre las exigencias que deben cumplir explicó la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral<sup>9</sup> que:

*“Vale la pena recordar que los títulos ejecutivos deben cumplir unos requisitos formales y sustanciales. **Los primeros** exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación (i) **sean auténticos** y (ii) **emanen del deudor** o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de un acto administrativo en firme. Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos. **Los segundos**, reclaman que el título ejecutivo **contenga una prestación** en beneficio de una persona que debe ser **clara, expresa y exigible**.*

*La exigencia de claridad, hace alusión a que los elementos constitutivos emerjan perfectamente de la lectura del título ejecutivo, sin que sean necesarios esfuerzos de interpretación para establecer cuál ha de ser la conducta que debe exigírsele al deudor o el monto de la obligación, en otras palabras, debe ser nítido el crédito -*

<sup>8</sup> LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, *Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano*, Dupré Editores, Tomo II, 7ª ed., Bogotá, 1999, pags. 388.

<sup>9</sup> M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas, STL17262-2016 y Radicación No. 45312.

*deuda que allí aparece, sin que haya para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones.”*

En otras palabras, la obligación es **clara** cuando no da lugar a equívocos porque están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan; es **expresa** cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación, y es **exigible** si se trata de una obligación pura y simple ya declarada. Conviene distinguir que cuando la obligación, con las características anteriores, está contenida o constituida en un solo documento, como, por ejemplo, un título valor como la letra de cambio, cheque, pagaré, entre otros, será un título ejecutivo singular, por el contrario, cuando está integrado por un conjunto de documentos, será complejo

**ii) Sobre la obligación de la entidad administradora de pensiones de efectuar el requerimiento al empleador que se encuentra en mora en el pago de las cotizaciones.**

En materia de cotizaciones al Sistema General Pensiones, son dos los sujetos protagonistas en relación con las cotizaciones, el trabajador que contribuye con un aporte y el empleador que está obligado a efectuar el descuento del salario y de trasladarlo a la entidad administradora, quién a su vez tiene a su cargo la obligación de efectuar el recaudo.

En los artículos 17 y 22 de la Ley 100 se consagraron las obligaciones del empleador en esta materia y en el 24, las de las entidades administradoras de los diferentes regímenes, en los siguientes términos:

*“ACCIONES DE COBRO. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo”*

Por ser dineros que pertenecen al Sistema General de Pensiones, la ley dota a las entidades administradoras de herramientas jurídicamente idóneas para perseguir las obligaciones que presenten mora y los intereses, consagrando en el artículo 5 del **Decreto 2633 de 1994**, cuando se trata de entidades de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, lo siguiente:

*“En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que ésta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimulación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordasteis.*

*Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho*

*requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993”*

**Examinado el contenido de la norma transcrita, se concluye lo siguiente:**

1. Vencido el plazo para efectuar el pago de las cotizaciones por parte del empleador, la entidad administradora del fondo de pensiones debe **requerirlo**.

En la disposición no se consagra el plazo con que cuenta la AFP para hacer el requerimiento, pues sólo exige que se realice después del vencimiento del plazo para hacer cada aporte; debiéndose destacar al ser los pagos “mes vencido”, no se precisa un requerimiento individual al vencimiento del plazo otorgado para la cancelación de cada uno de ellos; ni mucho menos se prohíbe realizar varios requerimientos por los mismos períodos, pues lo que se persigue con la norma es que el empleador se entere de la mora, aclare la situación, y satisfaga las cotizaciones adeudadas con sus intereses, pues de no hacerlo, dicha AFP podrá iniciar proceso ejecutivo; y la liquidación que efectúe presta mérito ejecutivo, aun cuando no contenga la firma del deudor en señal de aceptación.

2. En la norma se establece un **plazo de 15 días, que va dirigido al empleador y/o los socios según sea el caso**, con el fin de que se pronuncien frente al requerimiento: **i)** acreditando los pagos efectuados, **ii)** demostrando la existencia de novedades en relación con sus trabajadores, como, por ejemplo, la terminación del vínculo laboral para justificar la ausencia de pago, **iii)** conviniendo acuerdos de pago, **iv)** plantear sus inconformidades en relación con la liquidación presentada, etc.
3. Vencido ese plazo, de no mediar satisfacción de la obligación de cotizaciones, la entidad está facultada para elaborar la liquidación que presta mérito ejecutivo y acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para su cobro por vía ejecutiva; sin que la norma imponga un plazo específico para ello; sin perjuicio de la consecuencia jurídica que se derive por la tardanza en efectuar el recaudo, en tanto el paso del tiempo puede generar la eventual prescripción de todas o algunas de las obligaciones.

**iii) La devolución de la demanda ejecutiva por incumplimiento de requisitos formales:**

La regulación existente en el estatuto procesal laboral respecto del proceso ejecutivo se torna precaria en relación con el contenido de la demanda ejecutiva, motivo por el cual debe acudirse al artículo 25 del CPTSS para verificar la demanda ejecutiva cumple con los requisitos formales allí establecidos, de no encontrarlos reunidos, el juez la *“devolverá al demandante para que subsane dentro del término de cinco (5) días las deficiencias que le señale”*, tal y como lo estipula el artículo 28.

En caso de incumplir lo anterior, se procederá al rechazo de la demanda.

## Caso Concreto

Examinado el asunto, observa la Sala que la parte ejecutante allegó Título Ejecutivo N° 6673-18 (fl. 11), donde se indica que el total adeudado es de “\$3’128.9571,00” especificando que el capital adeudado es de \$24’149.671 y por concepto de intereses de mora asciende a \$7’139.900; además adjuntó el detalle de deudas por no pago (fls. 12/20), donde se observa al final el total de la deuda de Contactar Servitiales S.A.S. en \$31’289.571, clasificando dicho valor entre capital e intereses, y en las pretensiones de la demanda ejecutiva, pidió librar mandamiento de pago por el valor total de “\$31’289.571,00 (fls.1/2).

Al respecto, se observa que si bien hubo un error de digitación en la puntuación de los números del título ejecutivo visible en fls. 11, lo requerido por el A Quo expresamente fue *“sírvasse aclarar, lo adeudado por capital, por cuanto la pretensión habla de un valor diferente al indicado en el título”*,

Aunque la Sala advierte que la ejecutante efectivamente incurrió en el error que se le endilga en la cifra que era objeto de cobro dentro del uno de los apartes del título base de recaudo, no es menos cierto, que al realizar lectura íntegra del referido documento se denota, como adujo esa misma parte, un error de transcripción o mecanográfico en la puntuación de la cifra total, dando apariencia de cambio del valor a ejecutar. No obstante, a pesar de esta imprecisión, lo cierto es que del contenido del referido documento puede establecerse con claridad que el valor de la obligación correspondía al reclamado en la solicitud de mandamiento de pago, cuyo monto corresponde desvirtuar al demandado. Tan es así, que con ocasión de las observaciones del A Quo, la ejecutante corrigió el error adjuntando copia del mismo documento, pero con la corrección del error de digitación, según lo pedido por el juez de ejecución, debiéndose entender subsanada satisfactoriamente por la AFP emisora del mismo documento al haber indicado como se le pidió, la razón de la diferencia del valor.

En ese sentido, considera la Sala que la determinación de rechazar la demanda por no haber aportado el título original, deviene en un exceso de ritual manifiesto, en tanto éste nunca exigió al ejecutante aportar nuevo título ejecutivo corregido; máxime por ser evidente que la supuesta inconsistencia en el título es sólo de digitación, y se encuentra aclarada en su propio texto por el detalle de las cifras y conceptos objeto de cobro, cuyo valor total aparece anotado en documento glosado en folio 20 del expediente que forma parte integrante de este título complejo, de modo que, resultaba superfluo emitir un nuevo título ejecutivo, pues el error de puntuación anotado en una de sus cifras no alteraba el contenido de la obligación material reclamada. Por tanto, la exigencia del A quo contraría los derechos constitucionales de debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Sobre las exigencias procesales, reiteró en sentencia **STL 4572 de 2020 la Sala Laboral de la C.S.J.** que, *“las formas no pueden convertirse en un obstáculo para alcanzar la efectividad del derecho sustancial. Por el contrario, deben propender por su realización dado que los reglamentos procesales se encuentran instituidos como*

*mecanismos que pugnan por la efectividad de los derechos. En consecuencia, cuando en una providencia se renuncia a la verdad jurídica objetiva por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales, puede configurarse un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto”.*

Aunado a lo anterior, es importante advertir frente al valor probatorio de las copias, lo consagrado por el **parágrafo del artículo 54 A** del CPTSS, el cual dispone:

*“ARTÍCULO 54-A. VALOR PROBATORIO DE ALGUNAS COPIAS. Se reputarán auténticas las reproducciones simples de los siguientes documentos: (...)”*

*(...) PARÁGRAFO. En todos los procesos, salvo cuando se pretenda hacer valer como título ejecutivo, los documentos o sus reproducciones simples presentados por las partes con fines probatorios se reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación personal, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros.”*

Esta norma debe interpretarse sistemáticamente con el **artículo 244 del CGP** donde se advierte:

*“ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso (...)”. (Negrillas fuera de texto)*

Al tenor de las disposiciones anteriores, debe señalarse que el título Ejecutivo N° 6673-18 visible en fls. 30, al tratarse de un documento privado, pese a tratarse de copia, **se presume auténtico**, mientras no haya sido tachado de falso o desconocido, según sea el caso, pues se observa que está suscrito por la señora Angela María Gaviria Londoño, en calidad de representante legal judicial de la ejecutante Protección S.A., quien a su vez suscribió el documento original del título visible en fls 11, lo que brinda certeza sobre su causa y origen, y por esta razón, cumple con las exigencias consagradas en el **parágrafo del artículo 54 A del Código Procesal del Trabajo**.

En consonancia con lo expuesto, se **REVOCARÁ** el auto mediante el cual el A Quo dispuso el rechazo de la demanda ejecutiva, y en su lugar, se ordenará al juzgado de primera instancia estudiar las pretensiones de la demanda ejecutiva en el auto que decida sobre el mandamiento de pago.

### III. COSTAS

Al haber salido avante el recurso de apelación no se causaron costas para la parte recurrente, de conformidad al numeral 1° del artículo 365 del Código General del proceso.

#### IV. DECISION DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL,

#### RESUELVE

**PRIMERO: REVOCAR** el auto de fecha y naturaleza conocidos, emitido por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado dentro del proceso ejecutivo promovido por PROTECCIÓN S.A. contra CONTACTAR SERVIRTUALES S.A.S., para en su lugar ORDENAR el estudio de las pretensiones de la demanda ejecutiva en el auto que decida sobre el mandamiento de pago.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta sede.

**TERCERO:** Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, devuélvase el expediente al Juzgado de procedencia.

Se ordena notificar lo resuelto por estados y enviar copia de esta decisión al correo electrónico suministrado por los apoderados de las partes.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

Certifico que el auto anterior fue notificado por ESTADOS N°54 fijados hoy 5 de abril de 2021 a las 8:00AM

\_\_\_\_\_  
El secretario